



Resolución de Superintendencia

N° 1144 -2017-SUCAMEC

Lima, 06 NOV 2017

VISTO: El Recurso de Apelación interpuesto el 22 de setiembre de 2017 por el administrado Deybis Williams Lopez Carrasco, en contra de la Resolución de Gerencia N° 3313-2017-SUCAMEC-GAMAC de fecha 23 de agosto de 2017, el Memorando N° 3448-2017-SUCAMEC-GAMAC de fecha 02 de octubre de 2017, el Dictamen Legal N° 685-2017-SUCAMEC-OGAJ de fecha 02 de noviembre de 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1127, se creó la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, como Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía administrativa, funcional y económica en el ejercicio de sus funciones;

Que, conforme a la Décima Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1127, toda referencia a la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil - DICSCAMEC que contengan las normas vigentes, se entenderá referida a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (en adelante, SUCAMEC);

Que, el literal t) del artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-IN, modificado por Decreto Supremo N° 017-2013-IN, establece como una de las funciones del Superintendente Nacional, resolver en última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos contra actos administrativos emitidos por los órganos de línea y desconcentrados de SUCAMEC;

Que, el artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, señala que: "El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas ofrecidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho (...)";

Que, por Resolución de Gerencia N° 3313-2017-SUCAMEC-GAMAC de fecha 23 de agosto de 2017, la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos, desestimo la solicitud de renovación de licencia de uso de arma de fuego y emisión de tarjeta de propiedad y canceló la licencia de posesión y uso de armas de fuego, cuyo titular es el señor Deybis Williams Lopez Carrasco, por registrar antecedente histórico de condena por delito doloso:

N° de Licencia	N° de Serie	Estado del arma de fuego
65540	186401	Operativo
67135	2340294	Operativo
207483	NH/486280	Operativo
231206	129974	Operativo
231263	DE4746	Operativo
231331	192344	Operativo
268490	EWX721	Operativo
291692	132277	Operativo
355336	91670750	Operativo
397779	MM23691S	Operativo



V.B.
E. Paz



V.B.
C. Verástegui

Que, con fecha 22 de setiembre de 2017, el administrado interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 3313-2017-SUCAMEC-GAMAC de fecha 23 de agosto de 2017 señalando que: "(...) sea declarada nula por desconocer el numeral 2,16 y 24 del artículo 2° y los numerales 3 y 22 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú y los artículos 69 y 70 del código penal en concordancia con el tercer párrafo del artículo 103 de la Constitución Política del Perú; y en consecuencia, le otorguen la renovación de su licencia de uso de arma para defensa personal y la tarjeta de propiedad. Por otro lado alega que, se le estaría vulnerando su derecho a la seguridad personal, legítima defensa y a la propiedad (...) basándose en los antecedentes penales históricos del 3 Juzgado Penal de Chimbote ocurrido en el año 2004 (...) y que en el presente caso se debió tener en cuenta la Teoría de los derechos adquiridos para aplicar la retroactividad benigna pues se le aplica una norma del 2017 para un hecho ocurrido más de 13 años";

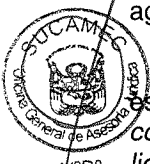
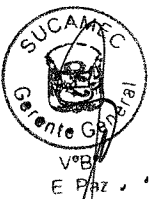
Que, finalmente el administrado alega que muchas de las armas que se le requiere internar de manera definitiva en la Resolución impugnada, no se encuentran en su poder, ya que el arma con serie 132277 fue robada, el arma con serie 186401 fue transferida por contrato de compra y venta con firmas legalizadas, y las armas descritas con serie N° NH486280, 129974, DE4746 y 192344, niega la propiedad de las mismas (informado mediante el expediente N° 201700227266). Asimismo menciona que las armas con serie N° 2340294, 91670750 y MM23691S fueron transferidas mediante acta de transferencia notarial de fecha 10 de abril de 2017, según se acredita en los Expedientes N° 201700198854 y N° 201700198843;

Que, partiendo sobre este último alegato, se procedió a verificar en la Constancia de registro de licencia de uso y tarjetas de propiedad de armas de fuego de la GAMAC, en el cual se constata que el administrado no ha regularizado cinco armas de fuego relacionadas a las series N° 186401, NH 486280, 129974, DE4746, y 192344. Adicionalmente a ello, con fecha 4 de mayo de 2017, el recurrente presenta una denuncia policial por pérdida de las armas con serie N° 132277 y EWX721;

Que, al respecto, cabe precisar que esta última arma de serie N° EWX721 sobre el cual solicita renovación de licencia y emisión de tarjeta de propiedad, el administrado presenta una denuncia por pérdida de la mencionada arma con fecha 4 de mayo de 2017; sin embargo, pasó verificación de la misma con fecha 9 de mayo de 2017 según se acredita en el formulario de cargo y en el Acta de Internamiento de Arma de fuego de la Sucamec de fecha 22 de setiembre de 2017, encontrándose con internamiento definitivo;

Que, por otro lado, es menester señalar que la Ley N° 30299 en el literal b) del artículo 7, establece que para obtener y renovar las licencias o autorizaciones otorgadas, las personas naturales o los representantes legales de las personas jurídicas deben cumplir, entre otras, con la siguiente condición: "**b) No haber sido condenado vía sentencia judicial firme por cualquier delito doloso, aun en los casos en que el solicitante cuente con la respectiva resolución de rehabilitación por cumplimiento de condena**". (Los subrayados y negrita son agregados);

Que, asimismo el numeral 7.1 del artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 30299 establece como condición para la obtención y renovación de licencias y autorizaciones: "**No contar con antecedente penal por delito doloso se refiere a que el solicitante de una autorización o licencia ante la SUCAMEC, no debe figurar en el registro nacional histórico de condenas del Poder Judicial por este tipo de delitos**. Conforme lo dispone literal b) del artículo 7 de la Ley, la rehabilitación regulada por los artículos 69 y 70 del Código Penal no resulta aplicable para la evaluación y consultas a cargo de la SUCAMEC" (Subrayado y negrita agregados);





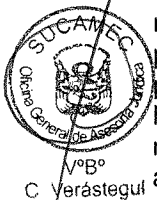
Resolución de Superintendencia

Que, en cuanto a lo referido por el administrado de que se declare nula la resolución impugnada al sustentarse que el literal b) del artículo 7 de la Ley N° 30299 y el numeral 7.1 del artículo 7 de su Reglamento, se contraponen a los artículos 69 y 70 del Código Penal; cabe indicar que dicha aseveración carece de sustento, pues si bien nos encontramos ante un conflicto normativo; es decir, normas legales que plantean consecuencias jurídicas distintas de tal forma que la aplicación de una de ellas implicaría la violación de la otra, ello no ocurre en el presente caso, pues la GAMAC aplicó la Ley N° 30299, y su Reglamento, en estricto cumplimiento del Principio de Legalidad establecido en el numeral 1.1 del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444, el cual dispone que toda actuación de la Administración siempre debe estar enmarcada dentro de una norma legal autoritativa que la faculta a realizar determinada acción administrativa, dado que los sujetos de derecho público sólo pueden hacer aquello que le está expresamente permitido y atribuido por las normas que regulan su competencia, en este caso, por la Ley N° 30299 y su Reglamento;

Que, en tal sentido, la validez de toda acción administrativa se encuentra necesariamente vinculada a lo dispuesto en la ley, por lo que una vez que la norma se encuentra vigente (en este caso particular, la Ley N° 30299 y su Reglamento), toda actuación decisoria de la administración pública se encuentra inexorablemente sujeta a ella (en aplicación del principio de Legalidad), por lo tanto no puede dejarse de aplicar la ley o emitir pronunciamiento en sentido contrario a ella (con tan solo interpretar que la misma es inconstitucional), toda vez que la autoridad administrativa se encuentra obligada a ejecutarla y cumplirla; bajo ese análisis, se desprende que la aplicación del literal b) del artículo 7 de la Ley N° 30299 y el numeral 7.1 del artículo 7 de su Reglamento, no contraviene o vulnera algún derecho o garantía establecida en nuestra Constitución Política;

Que, en cuanto a lo referido por el administrado de que existe una sola posibilidad de aplicación retroactiva de la norma (en el caso penal), y ésta se da por efectos del artículo 103 de la Constitución, cabe señalar que en el sustento 11 de la Sentencia del Tribunal Constitucional derivada del Expediente N° 0002-2006-PI/TC se establece que: *"en el momento en que una ley entra en vigor, despliega, por definición, sus efectos normativos y debe ser aplicada a toda situación subsumible en su supuesto de hecho; luego no hay razón alguna por la que deba aplicarse la antigua ley a las situaciones, aún no extinguidas, nacidas con anterioridad (...)".* Así tenemos que, para toda consecuencia jurídica se debe tener presente la regulación constitucional sobre la aplicación de las normas en el tiempo, pues esta de manera general, se encuentra prevista en el artículo 103 de la Constitución en los términos siguientes: *"La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo".* Además, debe agregarse que el artículo 109 de la Constitución dispone que: *"La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte";*

Que, a partir de estas disposiciones normativas se entiende que, en materia de aplicación de las normas en el tiempo, en nuestro ordenamiento rige la denominada teoría de los hechos cumplidos, es decir que la ley es obligatoria desde su entrada en vigencia, esto es, desde el día siguiente a su publicación en el diario oficial, y se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, salvo disposición expresa de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte o que permite que la legislación precedente siga produciendo efectos de manera ultractiva. Entonces, como regla general la ley se aplica a los hechos y situaciones que surjan desde que entra en vigencia y también a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes lo que incluye a aquellas, surgidas bajo la legislación anterior y que aun produzcan efectos, salvo que la misma ley establezca algún tipo de excepción, mediante reglas de derecho transitorio, a efectos de facilitar el tránsito de un régimen legal a otro nuevo;



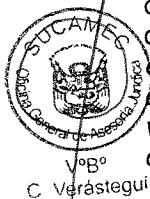
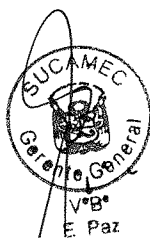
Que, en ese sentido, la Ley N° 30299, Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales relacionados de Uso Civil, dispuso la derogatoria de la Ley N° 25054, según lo previsto en su Única Disposición Complementaria Derogatoria. Por lo tanto, todo procedimiento iniciado a partir de la fecha de su vigencia, se regirá por la Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales relacionados de Uso Civil, aprobada mediante Ley N° 30299, y su Reglamento;

Que, asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Política del Perú, ésta es la máxima norma del ordenamiento jurídico en la jerarquía normativa del Estado, por lo que prevalece sobre toda norma legal, reconociéndose la primacía de la Constitución; asimismo, establece que la ley prevalece sobre toda norma de inferior jerarquía y así sucesivamente, siendo esencial su publicidad para la vigencia de la misma. En ese sentido, en concordancia con los artículos 103 y 109 de la Constitución, la Ley N° 30299 publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de enero de 2015, entró en vigencia a partir del 6 de julio de 2016, siendo ésta de obligatorio cumplimiento, generando en el ordenamiento jurídico los efectos vinculatorios de las normas y preceptos jurídicos;

Que, en cuanto al argumento esgrimido por el administrado sobre la violación al derecho de propiedad, y que la Sucamec estaría intentando apropiarse de un bien propio que no le pertenece, desconociendo el derecho a la propiedad y a la herencia, así como la inviolabilidad del derecho de propiedad establecido en el artículo 70 de la Constitución, cabe indicar que el Tribunal Constitucional en el expediente N° 0008-2003-AL/TC, ha precisado que: *"El derecho a la propiedad es concebido como el poder jurídico que permite a una persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Así, la persona propietaria podrá servirse directamente de su bien, percibir sus frutos y productos, y darle destino o condición conveniente a sus intereses, siempre que ejerza tales actividades en armonía con el bien común y dentro de los límites establecidos por la ley"*. Asimismo, en el expediente N° 03258-2010-PA/TC, ha señalado que: *"En consecuencia, el goce y ejercicio del derecho de propiedad solo puede verse restringido en los siguientes supuestos: a) estar establecidas por ley; b) ser necesarias; c) ser proporcionales, y d) hacerse con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática. En conclusión, el derecho de propiedad solamente puede ser materia de restricciones por las causas y finalidades señaladas en la propia Constitución"*, por lo tanto, es necesario subrayar que el ejercicio del derecho a la propiedad no es absoluto e importa limitaciones legales;

Que, de lo argumentado precedentemente se evidencia que no existe violación alguna sobre el derecho de propiedad del administrado, puesto que la Sucamec actúa conforme a la potestad otorgada por la Ley N° 30299, siendo que en el presente caso se ha dispuesto la cancelación de las licencias de posesión y uso de arma de fuego, y el internamiento definitivo de dichas armas, al amparo del artículo 41 de la referida ley, que a la letra dice: *"La Sucamec decide el destino final de las armas de fuego, municiones y materiales relacionados incautados, decomisados, (...) optando por su asignación para el servicio de la Policía Nacional del Perú, la venta vía subasta o remate, su donación a los clubes de tiro debidamente acreditados o museos cuando las características del arma incautada lo amerite. En caso contrario son destruidos"*;

Que, bajo ese criterio, resulta pertinente indicar que de acuerdo con el numeral 22.6 del artículo 22 de la Ley N° 30299, en el ejercicio de sus potestades de control, fiscalización o sanción, la Sucamec está facultada para disponer la cancelación o suspensión de licencias de uso de armas de fuego cuando se incumpla con alguna de las condiciones establecidas en el artículo 7 de la Ley N° 30299, lo que ha ocurrido en el presente caso; del mismo modo, en concordancia con el artículo 29 de su Reglamento; en consecuencia, con la cancelación de las licencias de uso de armas de fuego;





Resolución de Superintendencia

Que, por otro lado, referente a lo que indica el administrado, respecto que la resolución impugnada vulneran su derecho a la legítima defensa debemos precisar que el numeral 24 del artículo 2 de la Constitución señala que: *“El derecho a la legítima defensa, establece que el ciudadano dentro de un debido proceso debe establecer su defensa,…”* en tal sentido, cabe precisar que el “debido proceso” en sede administrativa se sustenta en el principio del Debido Procedimiento, recogido en el numeral 1.2 del Artículo IV de la Ley N° 27444, el cual dispone que: *“Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten [...]”* en tal razón la SUCAMEC cumple con todo lo establecido en la norma y no vulnera ningún derecho del administrado;

Que, en este contexto, luego de la verificación de la documentación contenida en el Expediente Administrativo, se observó mediante Oficio N° 100698-2017-B-WEB-RNC-GSJR-GG de fecha 19 de junio de 2017, del Jefe de Registro de Condenas de la Gerencia General del Poder Judicial, donde consta que el administrado registra antecedentes por delito doloso en el 3 Juzgado Penal de Chimbote, siendo por ello que la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos le denegó la solicitud de renovación de licencia en la modalidad de defensa personal; por lo tanto, el administrado no cumple con la condición para la obtención y renovación de licencias y autorizaciones, conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley N° 30299;



Que, el artículo 42 del Reglamento de la Ley N° 30299 Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, refiere que *“la SUCAMEC deniega o desestima la solicitud de licencia de uso de arma de fuego cuando el solicitante no cumpla con las condiciones o requisitos establecidos en la Ley y el presente Reglamento”*;

Que, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.1 y 1.4 del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444 sobre principios de Legalidad y Razonabilidad, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que les están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas, por lo que la autoridad administrativa al adoptar sus decisiones debe actuar sin sobrepasar los límites de la atribución conferida por la ley, observando la proporción entre los medios a emplear y los fines públicos bajo su tutela, de tal manera que la decisión tienda a su cometido, ciñéndose estrictamente a la norma legal;



Que, estando a lo expuesto en el Dictamen Legal N° 685-2017-SUCAMEC-OGAJ emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica, corresponde declarar desestimado el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución de Gerencia N° 3313-2017-SUCAMEC-GAMAC de fecha 23 de agosto de 2017; asimismo, conforme establece el numeral 6.2, artículo 6, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, el precitado dictamen debe ser notificado en forma conjunta con el acto administrativo que resuelve el presente recurso;



Con el visado del Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Gerente

V^oB^o General;
C Verástegui

De conformidad con las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N° 1127 que crea la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, y el Decreto Supremo N° 004-2013-IN que aprueba el

Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, modificado por Decreto Supremo N° 017-2013-IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar desestimado el Recurso de Apelación interpuesto por el señor Deybis Williams Lopez Carrasco, contra la Resolución de Gerencia N° 3313-2017-SUCAMEC-GAMAC de fecha 23 de agosto de 2017, emitida por la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos de la SUCAMEC, dándose por agotada la vía administrativa.

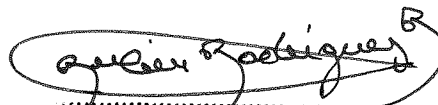
Artículo 2.- Disponer que la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos de la SUCAMEC cumpla con lo dispuesto en los artículos tercero, quinto y sexto de la Resolución de Gerencia N° 3313-2017-SUCAMEC-GAMAC de fecha 23 de agosto de 2017.

Artículo 3.- Disponer que la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos de la SUCAMEC ordene el internamiento definitivo de las armas no regularizadas por el administrado con serie N° 186401, NH486280, 129974, DE4746, y 192344. Asimismo, deberá rectificar la situación del arma Bersa con serie N° 132277 de Operativo a Robado en el Registro de licencia de uso y tarjetas de propiedad de armas de fuego de la SUCAMEC.

Artículo 4.- Notificar la presente resolución y el dictamen al interesado y poner de conocimiento de la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos de la SUCAMEC para los fines correspondientes.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC (www.sucamec.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.



RUBÉN ORLANDO RODRIGUEZ RABANAL

Superintendente Nacional
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad,
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC

